



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Resolución**

**Número:**

**Referencia:** EX-2017-12259033-APN-DMEYD#AABA RESOL JGM RECHAZO DE REC. DE ALZADA FIRMA LA BRAGADENSE S.A.

---

VISTO el Expediente N° EX-2017-12259033-APN-DMEYD#AABE del registro de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, los Decretos Nros. 1382 de fecha 9 de agosto de 2012, 2670 de fecha 1° de diciembre de 2015 y 1416 del 18 de septiembre de 2013, las Resoluciones Conjuntas de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. RESFC-2017-267-APN-AABE#JGM de fecha 22 de setiembre de 2017 y RESCF-2018-2-APN-AABE#JGM de fecha 2 de enero de 2018, y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita el recurso de alzada interpuesto por la firma LA BRAGADENSE SOCIEDAD ANÓNIMA contra la Resolución Conjunta de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO N° RESFC-2017-267-APN-AABE#JGM de fecha 22 de setiembre de 2017.

Que a través de la Resolución Conjunta de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO N° RESCF-2018-2-APN-AABE#JGM de fecha 2 de enero de 2018 se procedió a rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa LA BRAGADENSE SOCIEDAD ANÓNIMA contra la nombrada Resolución Conjunta N° RESFC-2017-267-APN-AABE#JGM y se dispuso la elevación de las actuaciones administrativas a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a los fines de sustanciar el recurso de alzada interpuesto en subsidio.

Que la citada Resolución Conjunta N° RESFC-2017-267-APN-AABE#JGM estableció, entre otras consideraciones, que la transferencia de dominio solicitada por LA BRAGADENSE SOCIEDAD ANÓNIMA, respecto del inmueble de propiedad del ESTADO NACIONAL, de origen ferroviario, ubicado en el Cuadro de Estación 9 DE JULIO de la Localidad y Partido de 9 de JULIO de la Provincia de BUENOS AIRES, identificado catastralmente como Circunscripción XV, Sección B, Chacra 143, Fracción II, Parcela 1c, con una superficie aproximada de terreno de UN MIL TRESCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS (1.320 m<sup>2</sup>), se encuadra en el marco del artículo 62 de la Ley N° 25.401 por tratarse de una transferencia onerosa.

Que al respecto es dable destacar que el artículo 73 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 2017 establece que los actos administrativos de alcance individual como también los de alcance general, a los que la autoridad hubiera dado o comenzado a dar aplicación, podrán ser impugnados por medio de recursos administrativos.

Que la mencionada Resolución Conjunta N° RESFC-2017-267-APN-AABE#JGM constituye un acto administrativo susceptible de ser impugnado por medio de recursos administrativos.

Que la mencionada Resolución Conjunta N° RESFC-2017-267-APN-AABE#JGM fue debidamente notificada a la firma LA BRAGADENSE SOCIEDAD ANÓNIMA en fecha 27 de septiembre de 2017 al domicilio constituido de la misma, habiéndose interpuesto Recurso de Reconsideración en los términos del artículo 84 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 2017, con jerárquico en subsidio e introducido la Cuestión Federal suficiente para Recurso Extraordinario, contra el dictado de la mencionada medida.

Que en este sentido, del contenido del escrito presentado por la firma LA BRAGADENSE SOCIEDAD ANÓNIMA surge la voluntad de impugnar la referida resolución, optando por interponer un recurso jerárquico en subsidio para el caso en que no prosperase el recurso de reconsideración.

Que considerando que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO es un “ente autárquico” (conf. art. 1° del Decreto N° 1382/12) y que, como se dijo, la mencionada Resolución Conjunta N° RESFC-2017-267-APN-AABE#JGM fue dictada por las autoridades superiores de dicha Agencia, el “recurso jerárquico” no resulta formalmente procedente, debiendo considerar al mismo, en virtud del principio del informalismo a favor del administrado, como un “recurso de alzada”, en los términos previstos en el artículo 94 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 2017.

Que en lo que refiere a los aspectos formales del recurso interpuesto debe considerarse al mismo procedente, por cuanto se encuentran acreditados los requisitos de personería, temporalidad y legitimación.

Que en cuanto a la cuestión de fondo, la recurrente alega que se debe dejar sin efecto la resolución atacada y revocar la misma sustentando su recurso en un solo agravio que considera determinante, cual es lo resuelto en su artículo 1° que dispuso que la escrituración del inmueble objeto de las presentes actuaciones sea onerosa, cuando, según expresa la recurrente, la Constitución Nacional y la Ley pertinente ordenan, de acuerdo a su criterio, que la transferencia sea gratuita.

Que la recurrente alega que es inconstitucional y contradictorio que una “Ley Presupuestaria Anual” contravenga los postulados anteriores de la Ley N° 25.069 que claramente impone que el PODER EJECUTIVO NACIONAL “deberá” – no “podrá” – transferir a título gratuito a los sujetos que invirtieron a la luz de la Ley N° 19.076, y que menos aún puede restringirse o violentarse por una resolución administrativa como ha sido la dictada por la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.

Que en consecuencia, la empresa LA BRAGADENSE SOCIEDAD ANÓNIMA dedujo recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra el acto administrativo citado precedentemente, por cuanto el mismo prescribe que la recurrente debe tramitar y resolver el pedido en el marco del segundo párrafo del artículo 62 de la Ley N° 25.401 a través de la transferencia dominial del inmueble solicitado a título oneroso, motivo por el cual esta última ha expresado que tal encuadre normativo va en franca colisión con derechos ya adquiridos por la citada sociedad anónima.

Que la recurrente expresa, entre otras consideraciones, que debe anularse y dejarse sin efecto la parte pertinente del artículo 1° de la Resolución Conjunta N° RESFC-2017-267-APN-AABE#JGM en cuanto enmarca la transferencia de dominio como onerosa en los términos del artículo 62 de la Ley N° 25.401, y definirla como gratuita de conformidad a los postulados de la Ley N° 19.076 en origen, y luego por la obligatoriedad de gratuidad que estatuye la Ley N° 25.069.

Que la recurrente manifiesta, que el reclamo data del año 1993, fecha en la cual LA BRAGADENSE SOCIEDAD ANÓNIMA solicitó la legal autorización para construir la planta de silos de la Estación 9 de Julio en el marco de la Ley N° 19.076, y que la Ley N° 25.069 que data del año 1995, según su interpretación, establece que el ESTADO NACIONAL deberá transferir el dominio en forma gratuita, en virtud de la cual invirtió importantes sumas, presupuestando haberse garantizado el terreno gratuitamente como su derecho subjetivo inalterable y con un interés legítimo concreto y reconocido.

Que la recurrente sostiene que no puede hacerse ninguna aplicación retroactiva de ninguna norma dictada con ulterioridad y proyectar sus efectos sobre hechos y acontecimientos ya consumados, partiendo de la idea que es inconstitucional y contradictoria la Ley N° 25.401, que se dictó –según su particular visión– solo para aprobar el Presupuesto anual del ejercicio fiscal correspondiente al año 2001, con lo cual agotó su contenido.

Que la Ley N° 25.069 establecía una obligación por parte del ex ENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES FERROVIARIOS de transferir a título gratuito, condicionada al cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 19.076.

Que en tal sentido, el artículo 62 de la Ley N° 24.401 establece que a los efectos de obtener los beneficios determinados por la Ley N° 25.069, los sujetos comprendidos en su artículo 1°, deberán acreditar haber solicitado y obtenido autorización, por parte de la autoridad competente con anterioridad al 15 de enero de 1999, para la construcción de obras en los términos de la Ley N° 19.076. El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá transferir a título oneroso los inmuebles citados en el artículo 1° de las Leyes Nros. 19.076 y 25.069, a los acopiadores y productores de cereales, oleaginosos y cualquier otra especie agrícola de características similares apta para ensilaje, así como también a otros operadores, en la medida que acrediten haber efectuado inversiones en los inmuebles conforme los términos de la Ley N° 19.076, con la conformidad expresa emanada, con posterioridad al 15 de enero de 1999, por la autoridad de aplicación.

Que de ello resulta que el propio legislador al sancionar dicha ley estableció los parámetros para acceder al beneficio establecido en las Leyes Nros. 25.069 y 19.076.

Que el artículo 62 de la Ley N° 25.401 luce incorporado como artículo 162 de la Ley N° 11.672, COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (T.O. 2014).

Que por tal razón no puede considerarse a dicha norma solo como parte de la aprobación del presupuesto anual del año 2001 y agotado su contenido, sino por el contrario, la misma se encuentra vigente y plenamente operativa.

Que pese a la manifestación de la recurrente de haber dado cumplimiento con ello, lo cierto es que de las constancias del expediente no surge la acreditación de tal extremo.

Que la entonces empresa FERROCARRILES ARGENTINOS, en ejercicio de las facultades que le fueron oportunamente delegadas, dictó las Resoluciones P. Nros 6323/71 y 6240/71 que regularon profusa y minuciosamente el procedimiento de cesión de terrenos en los términos de la Ley N° 19.076, estableciendo los requisitos que debían cumplir las solicitudes y el procedimiento que seguirían las mismas.

Que el ESTADO NACIONAL a través de los distintos organismos con competencia en la materia nunca se expidió favorablemente respecto a la solicitud efectuada por LA BRAGADENSE SOCIEDAD ANÓNIMA, en razón de ello y pese al tiempo transcurrido, dicha empresa nunca tuvo un derecho a la transferencia gratuita sino una simple expectativa.

Que al respecto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha manifestado que *nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones, y que la modificación de normas por otras posteriores no afecta derecho alguno emanado de la Constitución Nacional.*

Que en ese sentido la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN sostiene que para poder gozar

de un tratamiento jurídico específico establecido por un régimen legal o reglamentario determinado, resulta indispensable que exista un derecho adquirido que lo posibilite y, para que tal situación se configure, es menester que se encuentren reunidos en cabeza de su titular todos los presupuestos exigidos por la normativa aplicable para que su nacimiento se produzca. Ello toda vez que el derecho en expectativa, en contraposición a la noción de derecho adquirido, no es un derecho, sino una esperanza o posibilidad de que pase a serlo, cuando se reúnen los presupuestos legales correspondientes.

Que, en tal sentido merece destacarse que a través del dictado de la Resolución Conjunta N° RESFC-2017-267-APN-AABE#JGM la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO actuó en un todo de acuerdo con los procedimientos normativos reglados en la materia para el dictado de actos de tal naturaleza y en ejercicio de atribuciones y facultades propias e inherentes al ámbito y competencia determinados legalmente para su accionar por parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que habiéndose analizado en esta instancia administrativa la procedencia formal y los fundamentos esbozados por la recurrente, se concluye que resulta procedente sostener los principios de legalidad y razonabilidad de la Resolución impugnada, ello en base a las atribuciones y facultades específicas que posee en la materia la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO a cargo de la administración y disposición de los inmuebles de dominio privado del ESTADO NACIONAL.

Que el Artículo 94 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1.759/72 T.O. 2017 establece que contra los actos administrativos definitivos que impidan totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente, emanados del órgano superior de un ente autárquico, incluidas las Universidades Nacionales, procederá a opción de interesado, el recurso administrativo de alzada o la acción judicial pertinente.

Que finalmente, y en relación al pedido de inconstitucionalidad efectuado por la recurrente cabe tener presente la doctrina de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN en tanto expresa que a tenor del principio de división de Poderes, cualesquiera que sean las facultades del PODER EJECUTIVO NACIONAL para dejar sin efecto actos contrarios a las leyes, no le corresponde pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de ellas, por revestir el control de constitucionalidad de las normas emanadas del PODER LEGISLATIVO una facultad privativa del PODER JUDICIAL.

Que en función de los antecedentes expuestos y que han sido materia de análisis en el tratamiento del recurso de reconsideración interpuesto por la firma LA BRAGADENSE SOCIEDAD ANÓNIMA, que fuera rechazado mediante la Resolución Conjunta N° RESCF-2018-2-APN-AABE#JGM, corresponde desestimar el recurso jerárquico deducido en subsidio, considerado en esta instancia como recurso de alzada, interpuesto contra la nombrada Resolución Conjunta N° RESFC-2017-267-APN-AABE#JGM toda vez que no han sido aportados elementos de juicio que permitan modificar el temperamento adoptado por la referida Agencia.

Que atento lo expuesto no existe mérito para hacer lugar al recurso mencionado en el considerando que antecede, debiendo continuar la tramitación de las actuaciones en virtud de lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O.2017, que al efecto establece que el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, impidiendo que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos salvo que una norma expresa establezca lo contrario.

Que mediante IF-2018-36562638-APN-DGAJ#JGM la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 96 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso de alzada interpuesto en subsidio por la empresa LA BRAGADENSE SOCIEDAD ANÓNIMA contra la Resolución Conjunta de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N ° RESFC-2017-267-APN-AABE#JGM de fecha 22 de setiembre de 2017 por las razones expuestas en los considerandos de la presente medida.

ARTÍCULO 2º.- Notifíquese a la empresa LA BRAGADENSE SOCIEDAD ANÓNIMA el dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese y archívese.